

Marlene Ardaya: Guabirá, Unagro, San Cristóbal y PIL también serán operadores autorizados

La Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) anunció que en los siguientes dos meses, cuatro empresas que operan en Bolivia serán también certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA), un programa que entre 2006 y 2012 se implementó en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana y Perú. En Latinoamérica existen 300 firmas certificadas como OEA y hay 10 programas en diseño, de acuerdo con datos a 2012 de la Aduana.



Control. Ardaya habla con los periodistas de La Razón en oficinas del edificio central de la Aduana. Foto: Jose Lavayén

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Imaña / La Paz

11:43 / 15 de febrero de 2016

Tras una revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras, organización, administración, estados financieros, estándares mínimos de seguridad, entre otros, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) otorgó el 26 de enero en Santa Cruz la primera certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) a la Industria Boliviana de Sacos (Inbolsa), dedicada a fabricación y exportación de envases tejidos de polipropileno. Este aval da a la empresa varios beneficios para sus operaciones de

comercio que contribuyen a reducir sus tiempos de despacho y costos, lo que implica un incremento de su competitividad internacional. El Operador Económico Autorizado es considerado un agente de comercio exterior seguro y confiable para el país.

— **¿Qué beneficios tendrá el primer Operador Económico Autorizado del país?**

— Básicamente, la facilitación y control de las exportaciones, pero en menor tiempo. Lo que se busca es hacer que toda la cadena para la exportación sea segura, desde el embolsado hasta su llegada a su destino final, pasando por su transporte y embarcado. (Para ello) se establecerán mecanismos de control para que la mercancía no sea vulnerada o contaminada con droga u otros productos de contrabando. NdE. Los beneficios, por el momento, solo tienen vigencia en territorio nacional y se extenderán fuera de las fronteras cuando la ANB suscriba acuerdos con aduanas de países donde haya sido implementado el programa internacional OEA.

— **¿Cómo trabajará la empresa con la Aduana Nacional?**

— Un funcionario aduanero acompañará este proceso, es decir, se dará una atención personalizada a los OEA para que sus productos salgan en los tiempos previstos y que este proceso no se entorpezca con otro tipo de revisiones, tanto físicas como documentales. Pero eso no implica que, posteriormente, la Aduana no pueda hacer un control físico. Eso se hará en cualquier momento, ante alguna sospecha, denuncia o alerta internacional.

— **¿En cuánto se reducirán los tiempos de envío de productos al extranjero de los operadores económicos autorizados?**

— El funcionario aduanero certificará el cargamento de Inbolsa y todos los trámites en la propia planta de la empresa, aspecto que le ahorra tiempo a la empresa al momento de exportar.

— **¿Se está trabajando algún convenio con países donde esté vigente el programa OEA?**

— Estamos realizando un plan piloto para salir o ingresar por la Hidrovía Paraguay-Paraná y las aduanas de Uruguay y Bolivia están a punto de firmar un memorándum de entendimiento. Para ello, se están constituyendo los equipos técnicos —en los dos casos— a efectos de validar ambos procedimientos que nos permitan llevar adelante el sistema del operador económico de Bolivia y de que éste sea aceptado con todos los beneficios: con el ingreso rápido, sin verificación física, menos controles y lo mismo en contrapartida. Esta prueba piloto durará unos seis meses para poder consolidarse de manera oficial.

— **¿Con que países se firmarán este tipo de acuerdos?**

— Además del Uruguay, con Brasil, Perú y Argentina, la cual está en proceso de certificar a algunas empresas. Estamos a la espera de que se pueda concretar este propósito con Perú y lo mismo con Brasil. Chile no ha desarrollado el programa. Hay que aclarar que, a diferencia de países asiáticos, en América Latina son muy pocas las empresas certificadas OEA.

— **De las 11 firmas que inicialmente se anunció estaban en condiciones de cumplir con los requisitos para ser OEA, ¿cuántas obtendrán la certificación?**

— Son cuatro empresas que serán certificadas además de Inbolsa. Los ingenios azucareros Guabirá y Unagro en Santa Cruz, la minera San Cristóbal en Potosí y PIL en Cochabamba. Esperamos que este proceso termine en un plazo máximo de dos meses.

— **¿Por qué se retrasó la certificación del primer OEA (programada en principio para finales de 2014)?**

— La certificación requiere entre otras cosas de una auditoría muy rigurosa. No es que el proyecto sufrió un retraso, sino que fue el tiempo necesario para que las empresas puedan realizar las inversiones indispensables en infraestructura, tecnología y capacitación (de su personal).

— **¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la certificación?**

— Recursos humanos (capacitados) y también alguna ISO, lo cual no es una limitante, pero sí se considera importante porque una ISO garantiza el trabajo de las empresas. Se requiere también que el Servicio de Impuestos avale que la compañía postulante no tenga deudas ejecutoriadas con el fisco o con alguna financiera.

— **¿Cómo la Aduana Nacional de Bolivia planea ampliar el alcance de este programa?**

— Básicamente promoviendo los resultados que tienen las empresas que son y serán certificadas. Por ejemplo, uno de los ingenios azucareros tan solo con firmar una carta de intenciones, que le permitió a la administración aduanera verificar todo su proceso de producción, tuvo un contrato millonario el año pasado. Hoy por hoy, deberíamos empezar a pensar que todas las empresas pueden ser OEA de tal manera que puedan tener un flujo de tránsito mucho más rápido, incluso con los otros países.

..

54% del agro usa semilla certificada por el INIAF

El 54% de las tierras que se siembran en Bolivia (1,8 millones de hectáreas) utilizan semilla certificada por el INIAF, lo que ahorró a los agricultores del país unos \$us 130 millones que debían ser destinados a la importación de ese insumo.



Producción. Cultivos de soya en el centro experimental de la Anapo, en el norte de Santa Cruz. Foto: Archivo

La Razón (Edición Impresa) / Wálter Vásquez / La Paz

10:59 / 15 de febrero de 2016

El 54% de las tierras que se siembran en Bolivia (1,8 millones de hectáreas) utilizan semilla certificada por el INIAF, lo que ahorró a los agricultores del país unos \$us 130 millones que debían ser destinados a la importación de ese insumo.

El director interino del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y responsable nacional de la Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas de esa entidad estatal, Freddy Caballero, informó que ese porcentaje corresponde a 115.000 toneladas de 28 especies.

La cantidad de simiente que tienen el aval de esa institución se duplicó desde el año pasado, pues a mayo de esa gestión, esa misma entidad reportó que había certificado la semilla de entre el 20 y 25% de la producción agrícola nacional.

La mejora en la calidad de esos gérmenes fue posible gracias al apoyo del Banco Mundial (BM) y las cooperaciones suiza y danesa, que destinaron unos \$us 50 millones al fortalecimiento de “la capacidad de investigación e innovación nacional” en el sector, recordó el gerente del Sector Agrícola para Latinoamérica del organismo multilateral, Laurent Msellati. La contraparte del Gobierno boliviano en este trabajo, agregó, llegó a unos \$us 9 millones.

Msellati destacó que el hecho de que más de la mitad de las 3,5 millones de hectáreas (ha) sembradas en Bolivia, es decir, 1,8 millones de hectáreas, utilice semilla certificada por el INIAF hace que las simientes sean más aptas y mucho más resistentes a las sequías y a las lluvias, lo que mejora los rendimientos de producción y los réditos para los agricultores.

“Se hace una certificación de la semilla y después se hace una multiplicación de los granos en parcelas privadas de unas 14.000 familias de pequeños productores”, sostuvo.

Refiriéndose a quienes se dedican a la producción de simientes, Caballero precisó que son familias, empresas, pequeñas asociaciones e instituciones privadas. “Para ellos hacer semilla de calidad es un negocio”, dijo.

El director interino del INIAF ponderó además el apoyo financiero del Banco Mundial al instituto estatal, porque permitió que éste fortalezca sus actividades y modernice sus laboratorios en Cochabamba. Los recursos, detalló, fueron principalmente destinados a la compra de vehículos, para que el personal de esta repartición pueda llegar a todas las regiones donde haya productores que quieran certificar los granos que cultivan para la siembra. Ese respaldo económico, además, “nos ha permitido fortalecer nuestra gente y capacitar a más personas para que puedan participar” de esta actividad, expresó Caballero.

Beneficios. Según Msellati, los recursos también sirvieron para crear una red de cooperación con empresas privadas, universidades y actores del gremio. “El papel del INIAF incluye el impulso a la investigación e innovación agrícola en este país, pero también la conformación de un sistema muy colaborativo con los otros actores del sector”, consideró.

Ambos representantes coincidieron en que el uso de este tipo de productos nacionales le ahorra a los agricultores del país aproximadamente \$us 130 millones por año.

Según expertos, el uso de semilla no certificada representa un riesgo para la agroindustria, ya que en el largo plazo puede causar la degradación de los suelos y del ecosistema.

Caballero explicó que el sector que más se beneficia con la dotación de gérmenes acreditados es el sojero, pues el 80% de la producción de esa oleaginosa (880.000 ha de un total de 1,1 millones de ha sembradas) utiliza simiente garantizada. Al respecto, el expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) Demetrio Pérez aseguró que el empleo de simiente certificada abarata los costos del sector y que un producto de mala calidad le genera pérdidas económicas.

“Cuando la semilla no está certificada es posible que sea de mala calidad y por lo tanto no germine. Lo importante es tener un germen de calidad, porque ahí es donde se inicia el éxito de la cosecha”, afirmó.

Los productos que mayor demanda tienen de semilla acreditada, después de la soya, son la papa, el maíz, el trigo y el sorgo, precisó Caballero, quien añadió que el 99% de la producción de trigo y el 100% de los cultivos de sorgo utilizan simientes certificadas por el instituto estatal.

Msellati mencionó que los recursos otorgados por el Banco Mundial al país para esta iniciativa se acabarán a fines de este año y que es necesario dar continuidad a las actividades realizadas hasta la fecha.

“Hay que pensar cómo van a perdurar los logros, qué va a pasar cuando se acabe el financiamiento de este organismo multilateral”, manifestó el gerente, quien luego destacó la predisposición del BM para seguir colaborando con el país en esta labor. Todavía falta fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación en el sector, apuntó.

Apuntes para tomar en cuenta

Vigencia. El proyecto de cinco años del Banco Mundial y las cooperaciones suiza y danesa para fortalecer al INIAF culmina esta gestión.

Reflexión. Msellati cree que no se puede pensar en un sector agrícola sin investigación, innovación y transferencia tecnológica.

Ejemplo. El éxito de la agricultura brasileña se debe a que su gobierno comenzó a invertir en estos aspectos desde los 70, indicó.

BM dará \$us 110 millones más al sector

Los proyectos estatales Alianzas Rurales (PAR) e Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) recibirán un financiamiento adicional de \$us 110 millones del Banco Mundial (BM), pues ambos lograron mejorar las condiciones de vida de productores de áreas rurales pobres del país.

Así lo confirmó Laurent Msellati (foto), gerente del Sector Agrícola para América Latina de ese organismo multilateral. El representante recordó que PICAR, que enfoca su ayuda hacia comunidades en pobreza extrema, comenzó en 2012 con una inversión de \$us 40 millones y ratificó que en los próximos meses recibirá un crédito adicional de \$us 60 millones. “Hasta ahora, el PICAR ha beneficiado a 150.000 habitantes, lo que equivale a 35.000 familias. Eso ha sido posible a través de 800 subproyectos en 642 comunidades (que tienen condiciones de vida) más precarias”, explicó.



PAR, entretanto, tiene una cobertura mayor, pues está dirigido a pequeños agricultores que tienen capital, a quienes se les ayuda a mejorar sus condiciones de acceso a los

mercados. “Al generar impactos positivos sobre el ingreso neto de los pequeños productores se produce un efecto eficaz sobre la reducción de la pobreza. Hay un impacto positivo y directo con la ampliación de las áreas cultivadas y también un efecto favorable, aunque no tan grande, en la generación de empleo”, resumió.

El PARI recibió \$us 59 millones, en tanto que el PAR II ejecutó \$us 45,5 millones. A ese monto se prevé un incremento de \$us 50 millones. PAR y PICAR son implementados por el estatal Programa Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (Empoderar).